

HONDURAS: ¡Indignarse no basta!

JENNIFER ERAZO
2015

- Honduras no ha podido resolver las múltiples crisis económicas, políticas y sociales que arrastra desde su creación como república pero principalmente desde que retornó a la constitucionalidad en 1982. El golpe de Estado de junio de 2009 vino a agudizar esa situación y develó profundas deficiencias institucionales que no han permitido profundizar democracia y construir cohesión social.
- A pesar de que se observan cifras macroeconómicas y macro fiscales alentadoras en el año 2015, eso no se traduce en la mejora de la calidad de vida de la población hondureña, ni en una equitativa redistribución de la riqueza.
- El país presenta altísimos índices de impunidad, en 2015 fue catalogado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) como el séptimo país del mundo donde más prevalece la impunidad. Lo anterior se traduce por ejemplo en que 9 de cada 10 casos de homicidios nunca llegan a ser judicializados.
- Las investigaciones sobre la corrupción en el IHSS son la chispa que encienden las antorchas de la indignación. Es a partir de allí que aparece el Movimiento Indignados, que tiene como demanda central la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad.
- Porque indignarse no basta. La aparición y fuerza ética del movimiento de los indignados, dan cuenta de que la población hondureña exige respuestas a las crisis por vías democráticas. Respuestas que ni el gobierno ni la oposición fragmentada y debilitada han podido dar hasta ahora.
- Es urgente la construcción de una agenda democrática y de desarrollo inclusivo. Los intereses de las élites económicas y políticas deben supeditarse a las necesidades de la población para reducir inequidades y desigualdades, es necesario avanzar hacia un nuevo pacto social.



Cada vez más ricos, cada vez más pobres

El país viene recuperando su economía de manera lenta pero constante. El crecimiento esperado para el cierre de 2015 según proyecciones del Banco Central de Honduras es de un 3.5% del PIB, la mejor perspectiva de crecimiento en el triángulo norte de Centroamérica.

En materia tributaria se pueden observar importantes avances también, luego de aplicar una serie de reformas tributarias regresivas, basadas en gran medida en impuestos indirectos, se estaría logrando al menos un 16.4% de ingresos tributarios, cifra record en el triángulo norte de Centroamérica en los últimos años. En el cierre de 2014, el ingreso tributario que más contribuyó fue el Impuesto sobre ventas (IVA) con una participación de al menos 42.7% del total. Al final los más pobres, que son el 65% de la población son los que tributan más a través del IVA, aumentando la brecha de desigualdad en el país.

De otro lado se observa una disminución en el peso de la deuda pública al pasar de 45% a 42.5% del PIB entre 2013 y 2014.

Pero todas esas cifras macroeconómicas y macro fiscales alentadoras no se traducen en la mejora de la calidad de vida de la población hondureña, ni en una equitativa redistribución de la riqueza.

Según datos del Banco Mundial, Honduras es uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica con un 0.580 en el índice de GINI. Esa condición se observa con mayor claridad en la desigualdad por ingreso, donde el 20% de los más pobres de Honduras no alcanzan ni el 4% del total del ingreso y; en contraste, el 20% de mayores ingresos supera el 50% de dicho total.

En la actualidad 65% de los hogares vive bajo la línea de pobreza y 45% de esos bajo pobreza extrema, viviendo con menos de 2.5 dólares diarios. Seis de cada diez hogares rurales viven en extrema pobreza, situación agravada cuando la mujer es la jefa del hogar. A la vez que la encuesta Permanente de Hogares de propósitos múltiples de mayo de 2014, indica que la tasa de desempleo abierto en zonas urbanas aumentó

de 6% en 2013 a 7.5% en 2014, con mayor impacto en jóvenes y mujeres.

Con ese contexto socioeconómico tan crítico de fondo no es raro que la cantidad de migrantes hondureños y hondureñas principalmente hacia Estados Unidos, estén incrementando. Según estudios de la ACNUR en Honduras del 2012 al 2014, las tasas de migración aumentaron un 27%; 60,000 personas deportadas en 2012 aumentando a cerca de 81,000 en 2014. Un 10% de las personas deportadas en 2014 fueron niños y adolescentes.

El país expulsa a su población al no poder garantizarles empleo, vivienda y servicios básicos. Se calcula que alrededor de 1.2 millones, un 88% del total de migrantes hondureños, tienen a Estados Unidos como destino final. Los altos índices de violencia e inseguridad se suman a la lista de factores que impulsan a las personas a buscar mejores derroteros de vida fuera del país.

Inseguridad ciudadana, Violencia e Impunidad

El país ha logrado reducir la tasa de homicidios por 100 mil habitantes de 79 a 68 entre 2013 y 2014 de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y el Observatorio de la Violencia. Sin embargo y más allá de la reducción de las muertes violentas, la violencia generalizada, el aumento de muertes “indeterminadas” que no forman parte de las estadísticas, los femicidios así como las desapariciones siguen en aumento.

El mismo observatorio de la Violencia de la Universidad realizó una encuesta de percepción ciudadana de inseguridad en diciembre de 2014 que indica que un 70% de las personas cree que la inseguridad es el principal problema del país.

Las medidas implementadas por el gobierno para reducir la violencia y criminalidad son fuertemente represivas y militaristas, influenciadas fuertemente por la política norteamericana y su enfoque de “guerra contra las drogas”.

Es importante señalar que el país ha aumentado su participación como puente de paso de la droga hacia



Estados Unidos y Europa, pero también comienza a crecer el consumo interno, generando problemas de salud pública que hasta la fecha no se abordan de manera integral.

Lo anterior genera una “guerra sin cuartel” entre carteles de drogas y de criminalidad organizada que incluye la participación de maras y pandillas para pelear control de territorios. Las estrategias del crimen organizado incluyen por supuesto la cooptación de funcionarios públicos relacionados a la seguridad, defensa y justicia para garantizar su establecimiento criminal.

La población general está cercada, pero especialmente los jóvenes, en una mezcla de las acciones de la criminalidad organizada y las políticas de seguridad represivas. Dos bandos fuertemente armados en lucha frontal, donde estrategias de prevención, rehabilitación y reinserción por parte del Estado no son prioritarias.

Las mujeres también están sufriendo las consecuencias de la violencia. Naciones Unidas señaló que de 2005 a 2014, en Honduras hubo un aumento del 263% en los feminicidios. El mismo informe señala que cada doce horas es asesinada una mujer en Honduras, convirtiéndose en el lugar más peligroso del mundo para las mujeres, entre los países que no están en guerra.

¿Justicia en Honduras?

Frente a esa situación de violencia e inseguridad, se suman los enormes desafíos que presenta el sistema de Justicia, entre ellos la falta de independencia judicial, debilidades técnicas y administrativas y la corrupción que atraviesa muchas de sus organismos y funcionarios.

El país presenta altísimos índices de impunidad, en 2015 fue catalogado como el séptimo país del mundo donde más prevalece la impunidad y resultan como un ejemplo, en que 9 de cada 10 casos de homicidios nunca llegan a ser judicializados.

En los primeros días de noviembre, la reportera especial de las Naciones Unidas sobre Derechos

Humanos de pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, señaló la situación crítica que atraviesa esa población en Honduras. Desde el 2010 a 2015, al menos 44 indígenas han sido asesinados, por falta de reconocimiento de sus derechos, violencia e impunidad que operan en el país.

Y en el marco de la 156ava sesión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de sociedad civil presentaron denuncias sobre violaciones a Derechos Humanos sobre pueblos indígenas y afrodescendientes y sobre la falta de independencia judicial. La CIDH lamentó que el gobierno de Honduras no se presentara a la audiencia inicial. Es posible que el resultado de esas investigaciones genere algunas sentencias condenatorias al Estado hondureño.

Según reporta una serie de encuestas realizadas por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC S-J) y la universidad José Simeón Cañas (UCA), en el 2014, 7 de cada 10 hondureños y hondureñas desconfían de las instituciones que investigan e imparten justicia.

Se espera que para enero de 2016, Honduras elija a sus nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para un período de 7 años. El momento es crucial para la Justicia en el país, se requiere de procesos más transparentes, participativos e independiente de intereses de élites políticas y económicas.

Es importante recordar que en diciembre de 2012, el Congreso Nacional, sin facultades constitucionales para hacerlo, destituyó a 4 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por fallas a conductas administrativas. El Congreso Nacional solo tiene facultades para aprobar o improbar acciones de los magistrados, no es de su competencia constitucional destituirlos. Los magistrados destituidos se habían opuesto a ciertas reformas constitucionales propuestas desde el ejecutivo y del entonces presidente del Congreso Nacional. El hecho fue denominado por muchos sectores de sociedad civil y analistas sociales como un “Golpe técnico al poder judicial”

Con antecedentes como el Golpe de Estado en 2009 y el golpe técnico al Poder Judicial de 2012, la sociedad



civil y la cooperación internacional tienen intereses más que justificados para dar fuerte seguimiento a la elección de la nueva Corte. La independencia judicial frente a otros poderes del Estado, la eliminación de posibilidades de cooptación de los mismos frente a intereses de grupos económicos particulares o del crimen organizado y la garantía de no manipulación por parte de los partidos políticos en el proceso, son las demandas más sensibles desde la sociedad civil.

La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional de Honduras, que incluye las interpretaciones de la Constitución, así como la dirección general del sistema de justicia en el país. Su papel es esencial para avanzar en la construcción de una democracia sólida y estable.

Corrupción, la chispa que enciende las antorchas de la indignación

La crisis institucional que Honduras vive encuentra base firme en la corrupción. La percepción de la ciudadanía sobre la corrupción y su relación directa con la impunidad es muy alta, se trata de una corrupción sistémica que pone en precario cualquier intento de fortalecimiento democrático y de desarrollo económico y social del país.

Con esa situación de fondo, el Gobierno de Honduras dio algunos pasos de buena voluntad para mejorar la transparencia, al firmar un convenio con Transparencia Internacional para realizar procesos de investigación en las instituciones, de Educación, Salud, Co-alianza, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaría de Seguridad. En ésta última se priorizó investigar sobre el manejo de los fondos de la Tasa de Seguridad.

La Tasa de Seguridad, en vigencia desde 2012, comprende la aplicación de nuevos impuestos a transacciones financieras, comidas rápidas, telefonía móvil, casinos y tragamonedas entre otros. Los ingresos tributarios obtenidos son manejados por un comité técnico de Fideicomiso y deben invertidos en la reducción de los altos niveles de inseguridad pública.

Sin embargo, según informes del mismo comité técnico del fideicomiso, más del 40% de los fondos

de la tasa de seguridad se destinan directamente al Ministerio de Defensa, fortaleciendo en gran medida la policía Militar de Orden Público. El mecanismo es fuertemente criticado por sectores de la oposición pues existen muchos niveles de secretividad en la ley, poco control y transparencia sobre el uso y destino de los fondos.

Pero los avances son mínimos, recientemente y por declaraciones del propio embajador estadounidense, James Nealon, se conoció que nuevamente el país quedó fuera de los fondos de la Cuenta del Milenio en 2016 por no aprobar 11 de 20 indicadores, principalmente relacionados al control de la corrupción, pero también sobre libertad económica y derechos humanos. La Corporación de Desafíos del Milenio, es un programa de cooperación desde los Estados Unidos para el fortalecimiento del desarrollo económico de países de la región.

A pesar de contar con una historia política plagada de corrupción, una situación que ha puesto al límite a la población hondureña en los últimos meses fue el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El caso, que involucró a directivos y funcionarios del IHSS, dejó en situación de total precariedad a esa institución pública poniendo en riesgo la vida de sus afiliados que no pudieron acceder a medicamentos ni a atención médica adecuada.

Los recursos fueron desviados por un lado a cuentas personales y de otro lado sirvió para financiar campañas políticas de algunos miembros del partido Nacional de Honduras, el partido gobernante. El Ministerio Público en comunicados a la prensa confirmó que algunos cheques que surgieron del desvío de fondos fueron a parar a las cuentas de ese instituto político. Y de otro lado, el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández en conferencia de prensa declaró que si se confirma ese delito, el Partido Nacional, su partido, estaría obligado a devolver ese dinero al Seguro Social. A la fecha no se conocen avances de la investigación alrededor de los cheques del Seguro Social enviados al Partido Nacional durante la campaña electoral 2013.



El caso de corrupción al Seguro Social fue la chispa que terminó de encender la llama de la indignación hondureña. A partir de que se exponen a la luz pública documentos relacionados a ese caso, poco a poco un grupo jóvenes de clase media, vinculados principalmente a partidos Libre y PAC, comienzan a organizar y desarrollar manifestaciones exigiendo justicia y cese a la impunidad. Desde el mes de mayo 2015 y en cuestión de semanas, las movilizaciones comenzaron a crecer y a sumar centenares de personas de diversos sectores de la sociedad especialmente de clases medias, autodenominados como “indignados/as”.

La simbología principal de los indignados son las antorchas encendidas que representan solidaridad contra las víctimas del Seguro Social y la indignación contra la corrupción. Es por eso que las movilizaciones se conocieron también como “marchas de las antorchas”.

Las movilizaciones de indignados constituyen una nueva manifestación de protesta social que desborda los esquemas y la teoría política conocida en Honduras, pero que sin duda representan una nueva forma de ejercicio de ciudadanía, que intenta recuperar la institucionalidad del Estado y dotar de sentido a una democracia vaciada de significado para la mayoría de la población hondureña.

El movimiento no presenta filiación a partido o corriente política de carácter específico. Sin embargo al inicio era notable la alta participación de dirigentes y jóvenes pertenecientes a partidos políticos de la oposición, principalmente Libre y PAC. Posteriormente rechazaron la participación de políticos en las marchas para complacencia de los medios de comunicación cercanos al oficialismo que criticaban la politización partidaria del movimiento. A partir de allí las movilizaciones comenzaron a decrecer en cantidad de personas y en el tiempo.

Las demandas del movimiento Indignado y la respuesta del Gobierno

Siguiendo la experiencia de Guatemala, los indignados/as colocaron como demanda principal,

la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), con apoyo de las Naciones Unidas con el fin de investigar actos de corrupción de funcionarios públicos contra la sociedad hondureña.

La CICIH ya era una de las propuestas que señalaba la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, instalada por el Gobierno hondureño con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) e integrada por comisionados internacionales de alto nivel, para esclarecer los hechos y ofrecer recomendaciones políticas para retornar a sendas democráticas luego del golpe de Estado en 2009.

Ante la contundencia de la realidad política creada por el movimiento indignado, posteriores denuncias de otros actos de corrupción y el manoseo institucional para mediatizar o encubrir la corrupción pública, el presidente de la república se vio obligado, a convocar a un Dialogo Social para abordar la problemática

La respuesta inicial del gobierno fue la de crear el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC), para evitar injerencia extranjera. Ante el rechazo generalizado de esa primera propuesta, el gobierno recurre a la Organización de Estados Americanos (OEA), que finalmente determina facilitar un diálogo entre todos los sectores políticos y sociales para encontrar una solución a la crisis que vive el país.

La propuesta de la OEA es la creación de una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), como una manera encontrar puentes entre la demanda de indignados/as y la propuesta del gobierno. El movimiento Indignados rechaza inicialmente la propuesta de la OEA, sin embargo se observa que además del gobierno, la cooperación y algunos sectores de sociedad civil están acuerpando la iniciativa que aún está por implementarse.

La misma propuesta de la OEA ha generado grados de división en el movimiento, sobre todo entre uno de los grupos que ganó mucha presencia mediática conocidos como “Oposición indignada” y otros grupos conformados a nivel nacional. Los primeros



estarían de acuerdo en integrar la CICIH dentro de la MACCIH.

Mientras que Oposición Indignada se concentra en la demanda de la CICIH, los demás grupos (Indignados somos todos, Indignados Comayagüela, Indignados Honduras, entre otros), organizados ahora en la “Coalición de Movimientos Indignados”, amplían los temas de agenda y acciones de lucha hacia una propuesta más integral de país. En ese espacio también se observa un mayor grado de articulación con bases del Partido Libertad y Refundación más no con su dirigencia.

Independientemente de lo que ocurra después, el papel ético de las diversas expresiones del Movimiento Indignado es central para detener por deslegitimación al menos por ahora, de proyectos autoritarios de gobierno y por otro lado, impulsar la implementación de instrumentos de combate a la corrupción.

Sistema de partidos y nuevas fuerzas políticas

La respuesta inusitada de la población en resistencia contra el golpe de Estado, dio un giro importante a las luchas sociales en Honduras y a la configuración de las fuerzas políticas. Por primera vez en muchas décadas, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas de izquierda, encontraron un espacio más amplio de coincidencia con potencial político transformador, a través del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Una parte del movimiento de resistencia popular dio origen al Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que participó por primera vez en elecciones generales en 2013, acumulando un 28% de los votos totales, alcanzando 36 diputaciones y 31 alcaldías.

La población más joven sin embargo, cansada de la polarización y de un sistema de partidos que no resolvía sus demandas democráticas, encontró en el Partido Anticorrupción (PAC), encabezado por un famoso periodista deportivo, un espacio electoral novedoso con énfasis en la transparencia y anticorrupción. Es así como también a partir de la crisis, aparece también el PAC y obtiene una

importante cuota de poder, un 14% de los votos en su primera contienda electoral en 2013, alcanzando 13 diputaciones al Congreso Nacional.

El partido Nacional, la derecha más conservadora, ganó un segundo gobierno consecutivo en las elecciones generales 2013 con un 36% de votos del electorado. En cuanto al parlamento pasó de contar con 77 diputados en el período anterior a 48 en la actual legislatura. Enfrentando además fuertes señalamientos desde la oposición acusándoles de fraude electoral y escasa legitimidad.

El partido Liberal de Honduras (PL), tuvo uno de los reveses políticos más importantes de su historia al obtener solo un 20% de los votos. Reflejo de su fuerte división interna desde el Golpe de Estado y de una incapacidad de conectarse con las nuevas demandas de la población.

El sistema electoral bipartidista (Nacional –Liberal) por primera vez en más de cien años se encontraba momentáneamente roto, LIBRE y PAC entraban a la arena política con altas expectativas y demandas de sus electores.

¿Y dónde quedó la esperanza? La deuda pendiente de la oposición política

La responsabilidad de los nuevos partidos para hacer un balance más democrático en la vida política hondureña es histórica. Sobre todo frente a un partido de gobierno (Nacional) que cada vez más concentra el poder político de la mano de la militarización.

Pero la esperanza depositada por amplios sectores de la sociedad hondureña en los nuevos partidos políticos se está perdiendo. En una encuesta socializada por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), socializada en noviembre de 2015, se señalaba que la oposición política está debilitada en cuanto al respaldo ciudadano, pues no ha logrado canalizar el descontento ni la protesta ciudadana; ni influir en las relaciones de poder actuales. Y es que el camino de los nuevos partidos ha estado lleno de espinas, traspies y problemas. A parte de las presiones externas que incluye una campaña mediática nacional e internacional casi satanizadora de los mismos, tienen problemas internos profundos de qué preocuparse.



El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), enfrenta varios retos para poder convertirse en un partido con capacidad de impulsar propuestas emancipadoras. La organización política de tendencia centro izquierda está obligada a enfrentar algunas de las debilidades que se han evidenciado en su transición de movimiento social/partido opositor a importante fuerza política: liderazgos centralizados, escasa democracia interna, divisiones y conflictos, cierto grado de desvinculación con las bases y la ausencia de un programa partidario claro.

El Partido Anticorrupción (PAC), centro derecha, por su parte enfrenta el reto de pasar de la buena voluntad y los discursos a la práctica política y organizacional. Debe convertirse en partido, formar y consolidar estructuras, mejorar niveles de democracia interna y desarrollar su propuesta programática más allá del tema de la transparencia. En un país con necesidades estructurales tan marcadas como Honduras, un partido de tendencia monotemática no tiene posibilidades de crecer.

A pesar de que se ha venido configurando un intento de alianza opositora entre partidos Libre, PAC y Liberal, la misma no tiene sustento político fuerte, se basa en una lista de temas sin una estrategia política definida. Prueba de ello es que el actual régimen ha podido evitar negociar con PAC y LIBRE para alcanzar sus objetivos políticos.

La lista de temas en las que la oposición ha coincidido hasta la fecha son básicamente la discusión de reforma política electoral, donde la segunda vuelta es un imperativo; los esfuerzos por desconcentrar el poder del partido gobernante sobre la Corte Suprema de Justicia y la oposición parlamentaria frente a la Policía Militar.

Para avanzar hacia una agenda democrática más estratégica de la oposición se deben reconocer acciones inmediatas como neutralizar en el corto plazo, las medidas regresivas del régimen y afianzar un proyecto político más democratizador en el mediano y largo plazo. Para lograr sus objetivos es central para ellos acercar posiciones con un Partido Liberal bastante debilitado internamente, pero determinante

político con mucho peso en los retos de Honduras para avanzar caminos más democráticos.

De la indignación a la concertación para construir futuro

La actual situación política, social, económica y de seguridad que vive Honduras vuelve necesario repensar las forma y contenidos de la política.

El surgimiento de nuevas fuerzas políticas, la aparición y fuerza ética del movimiento de los indignados, dan cuenta de que la población hondureña poco a poco gana conciencia de la importancia de participar y buscar salidas a las crisis por vías democráticas.

El hecho de que el gobierno busque facilitadores de diálogo a nivel internacional para abordar la crisis política indica el reconocimiento de las profundas debilidades institucionales con un bajo nivel de confianza de la población y la urgente necesidad de la búsqueda de acuerdos y consensos mínimos entre todos los sectores de la sociedad para avanzar en un proyecto de país.

Si la oposición política quiere realmente transformar las relaciones de poder actuales debe mostrar señales claves de capacidad de diálogo, acuerdo y concertación. Debe tener la capacidad de identificar propósitos políticos comunes y conformar una coalición con un programa definido a través de elementos cohesionadores de las fuerzas que lo conformen.

Una condición fundamental para que el proyecto que impulse una alianza opositora rinda frutos es la incorporación de las necesidades y demandas de la sociedad civil en la agenda. Es necesario identificar convergencias que faciliten la articulación, en un clima de confianza y autonomía, ni movimientos sociales subordinados a partidos ni viceversa. Esa lección va principalmente para Libre, porque en el paso del Frente de Resistencia Popular a partido, dejó de lado las aspiraciones y formas de acción política que los movimientos sociales deben desarrollar para profundizar la Democracia.

Se pueden apreciar ciertos ejes articuladores para conformar una agenda democrática común



para impulsar en Honduras desde una oposición progresista, los más importantes son:

- 1.** Repensar el Estado. Abrir un debate sobre la reforma democrática del Estado y avanzar en planteamientos para avanzar a justicia social. La reforma del Sistema de Justicia es esencial en este punto, para garantizar una administración adecuada y acceso a todos los sectores por igual.
- 2.** Redefinir la Democracia. A corto y mediano plazo la discusión de la reforma política electoral es prioritaria, especialmente en repensar las formas de participación y representación.
- 3.** Desmilitarizar la sociedad y la seguridad. Colocar la garantía de los Derechos Humanos como eje articulador, buscar el diálogo, la convivencia, la prevención, la rehabilitación por sobre el autoritarismo de las armas y el uso de la fuerza.
- 4.** La transformación social y ecológica. La búsqueda de modelos económicos más solidarios, respetuosos de la vida y de los bienes de la naturaleza.



Autora

Jennifer Erazo

Coordinadora de programas, Friedrich Ebert
Stiftung – Honduras.

© 2015 Friedrich Ebert Stiftung FES (Fundación Friedrich Ebert)

Dirección: Edificio Torre San Carlos, 8avo piso
Colonia San Carlos, Tegucigalpa

Email: honduras@fesamericacentral.org

www.fesamericacentral.org

Apartado Postal: 1744, Tegucigalpa, Honduras

FES Honduras

La Fundación Friedrich Ebert inició actividades en Honduras en el año de 1982. En el transcurso de éstos años han variado algunos instrumentos de trabajo, pero siempre se ha mantenido vigente el objetivo principal: el fortalecimiento de la democracia participativa y equitativa junto a la promoción del desarrollo sustentable con justicia social.

Nuestros fuertes son el asesoramiento político y la apertura de espacios de diálogo e intercambio político entre nuestras contrapartes nacionales, centroamericanas y de América Latina.